

Documento de Trabajo Nº14

VIOLENCIA EN LA MACROZONA SUR

UNA MIRADA DESDE LOS ESTUDIOS DE CONFLICTOS INTERNOS



VIOLENCIA EN LA MACROZONA SUR

UNA MIRADA DESDE LOS ESTUDIOS DE CONFLICTOS INTERNOS

0.0

Contenidos

Introducción	7
Hacia una definición necesaria	9
<i>Tour de force</i>	13
Conclusión	17
Autor	19



Bomberos trabajando después de que atacantes desconocidos incendiaron camiones cerca de Temuco, Región de la Araucanía, Chile, el 6 de agosto de 2020. 20 vehículos de una empresa de arados fueron quemados como parte de una serie de agresiones supuestamente de grupos indígenas mapuches radicales.

Fuente: France Presse

0.1

Introducción

Los psicólogos suelen decir que el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y en ese sentido, el presidente electo Gabriel Boric tiene uno crucial, que es la violencia en la macrozona sur. Un tema muy complejo, que ningún gobierno ha podido resolver desde 1990 y sobre el que ha tenido que ir aclarando su postura. La última Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica de Chile indicó que el conflicto entre “mapuches y el Estado chileno” se percibe como el más intenso por la población (88%), entre muchos otros¹; su punto más alto desde que se comenzó a medir en 2011. Si bien, el presidente electo ha condenado la violencia, no participó en algunos debates sobre La Araucanía y ha votado como diputado en contra del estado de excepción que permite el despliegue de militares en apoyo de las policías.

No obstante, dos de los cuatro grupos más radicales —Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)— ya le anunciaron que su lucha continuará, con lo cual se despejan inmediatamente las dudas sobre cualquier cambio de actitud que estas organizaciones armadas podrían tener respecto de la llegada al poder de un gobierno de izquierda.

En una declaración difundida el miércoles 22 de diciembre por diversos blogs y reproducida por varios medios de comunicación, RML advirtió que “frente a los discursos de paz que intenta imponer esta falsa democracia, dejamos en claro que no soltaremos nuestras *tralkas* (armas de fuego). Mientras las forestales y empresas de áridos sigan

devastando nuestro territorio, las empresas turísticas sigan lucrando de nuestros recursos y las cárceles del sur continúen llenas de mapuche, el *weichan* (lucha) no parará. Ni con (Sebastián) Piñera ni con (Gabriel) Boric”. En la misma declaración también se adjudicaron el incendio de 31 cabañas en torno al lago Lanalhue.

A su vez, la CAM hizo un llamado al “pueblo mapuche rebelde a seguir resistiendo y a reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando (...). Le respondemos a esa nueva izquierda ‘hippie, progre y buena onda’ y que hoy celebra un gobierno socialdemócrata o, para ser más precisos, de centro-izquierda, que el pueblo mapuche tiene su propio ordenamiento político-militar desde antes de la formación del Estado chileno”.

Ante esta clase de emplazamientos, el mandatario electo respondió: “Nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición. Con todos quienes quieran retomar la paz nosotros vamos a tener diálogo, y ahí nosotros tenemos que, como futuro gobierno, ser muy cuidadosos. En esto también lo que les pido es que seamos todos cuidadosos, es un tema muy sensible, hay gente que ha sufrido mucho, ya sea en el pueblo nación mapuche o las víctimas de atentados o de violencia, así que en esto no especulemos”².

Es decir, las posiciones de las partes están meridianamente claras: enfrentamiento directo y diálogo

1 Pontificia Universidad Católica de Chile, “La Encuesta Bicentenario UC 2021”, p. 23. En https://politicaspUBLICAS.uc.cl/wp-content/uploads/2022/01/Encuesta-Bicentenario-2021-versio%CC%81n-final_OK-1.pdf.

2 Ex-Ante, <https://www.ex-ante.cl/wam-se-adjudica-ataque-incendiarario-en-la-araucaania-en-medio-de-alza-de-la-violencia-y-luego-de-que-siches-ofreciera-dialogar-a-grupos-radicales/>.

desde la legalidad. Aún faltan los pronunciamientos de Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y de Weichan Auka Mapu (WAM), con lo cual se completan los cuatro grupos radicales mencionados por las autoridades y la Multigremial de La Araucanía como responsables de la mayor parte de los atentados³ en la macrozona sur, que abarca desde el Biobío hasta Los Lagos.

El propósito de este documento no es revisar las causas profundas que explicarían en el conflicto ni las demandas que lo asisten en su dimensión actual, ya que han sido ampliamente expuestas en distintos libros⁴ y ensayos. Mientras las causas hacen énfasis en la historia, la cultura y factores socioeconómicos de larga data, las demandas más bien coinciden en elementos como la restitución de territorios considerados ancestrales; autonomía y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios; término o restricción de las actividades forestales; y fin de la denominación de “terrorista” a los alzados en armas (de ahí la insistencia en llamarlos “presos políticos”). De lo que se trata acá, es de examinar la situación de conflic-

to a la luz de los estudios y experiencias sobre insurgencias o guerrillas. Porque si bien lo que ocurre en la macrozona sur no tiene la magnitud de lo vivido en países como Perú entre 1980 y 1992⁵ o Colombia entre 1964 y 2016⁶, se presentan elementos recurrentes e inquietantes que permiten obtener lecciones que sean un aporte para abordar el conflicto y evitar su escalada. Por ejemplo, en lo que se refiere a la progresiva pérdida de control territorial por parte del Estado, a la necesidad de proteger a las comunidades locales que sufren la violencia de los grupos armados organizados, o bien las condiciones que deben rodear un eventual diálogo de paz.

Es pertinente tener en cuenta, antes de empezar, la advertencia del economista Paul Collier, que tras comparar múltiples conflictos internos, sostiene que los líderes guerrilleros explotan las diferencias étnicas para reclutar a sus miembros y justificar sus llamados a la guerra, aunque rara vez la etnia sea la causa real del problema. “Los cabecillas rebeldes utilizan los reclamos étnicos como cortina de humo para agendas menos respetables”⁷.

Juan Pablo Toro
Director ejecutivo AthenaLab

-
- 3 Multigremial de La Araucanía, “Avance Barómetro de Conflicto al 15 de abril de 2021”, en https://www.multigremialaraucania.cl/barometros/avance_15-04_barometro_de_conflicto2021.pdf.
 - 4 Algunos libros son: “Mapuche, colonos y Estado Nacional” de José Bengoa, 2018, editorial Catalonia; “La Araucanía: cinco siglos de historia y conflictos no resueltos”, de Jorge Pinto, 2020, editorial Pehuén.
 - 5 Gorriti, Gustavo (1999) “The Shining Path: A History of the Millenarian War in Peru”. The University of North Carolina Press, North Carolina.
 - 6 Ferro, Juan Guillermo y Uribe, Graciela (2002). “El orden de la guerra: FARC-EP entre la organización y la política”. Centro Editorial Javeriano, Bogotá.
 - 7 Collier, Paul (2005). “El desafío global de los conflictos locales”. Banco Mundial y Alfaomega colombiana. P. 24.

0.2

Hacia una definición necesaria

Ala definición sobre el tipo de conflicto armado que vive una sociedad tiene importancia porque va a determinar el tipo de respuestas que se buscarán para alcanzar la paz en el plano político, establecer el empleo de la fuerza y las normas que se aplicarán para cubrir a las partes enfrentadas y a la población civil. Como afirma el sociólogo Eduardo Posada Carbó, “no se trata tampoco de una discusión meramente semántica. Ni de un debate teórico y abstracto (...). Cualquier concepto que se seleccione estaría definiendo la naturaleza del conflicto y condicionando así las posibilidades para enfrentar su solución”.

En este sentido, el gobierno del presidente electo Gabriel Boric tendrá que definir de partida qué tipo de conflicto observa en la macrozona sur. Si uno de naturaleza política, basado en la reivindicación de mayor autonomía territorial dentro del Estado de Chile; un intento de secesión definitiva basado en el poder de las armas; un brote de violencia puntual de la mano de grupos armados fragmentados que operan como guerrillas (golpear y huir), apelan a tácticas terroristas (incendios y emboscadas) y se financian con actividades ilegales que incluyen extorsiones a agricultores, robo de madera y tráfico de drogas.

Si se acepta lo primero, se requerirá un enfoque integral del Estado, donde se coordinen esfuerzos en materia de seguridad, justicia, respaldo de autoridades, necesidades sociales y contenidos educativos. Si se asume lo segundo o lo tercero, la respuesta contemplará el empleo de la fuerza dentro del monopolio legal que detenta el Estado,

en cumplimiento de su deber de proveer seguridad. El gobierno saliente de Sebastián Piñera, por ejemplo, ha transitado desde la búsqueda de un diálogo amplio de la mano del entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, hasta terminar con fuerzas militares desplegadas en apoyo a Carabineros.

Por eso, el desafío inicial de la nueva administración será construir una definición del tipo de conflicto al que se enfrenta y lograr que esta narrativa sea aceptada por la mayoría de la población civil local, que debiera ser su principal preocupación, y por el país. Para elaborarla, existen varios criterios, los cuales pueden ser aceptados en su totalidad o no, pero que suelen ser los más empleados por quienes estudian conflictos armados internos en el mundo. Por lo demás, determinar el tipo de conflicto que se espera resolver requiere de un adecuado trabajo de inteligencia, desde el cual provendrán gran parte de los antecedentes necesarios para determinar un panorama situacional lo más completo posible, que permita elaborar y gestionar una estrategia de solución exitosa.

En cuanto a los conflictos y su naturaleza, los investigadores del International Peace Research Institute de Oslo⁹ han establecido cuatro categorías básicas que sirven de modelo:

- **Conflicto armado extraestatal:** Ocurre entre un Estado y un grupo no estatal fuera de su propio territorio.
- **Conflicto armado interestatal:** Ocurre entre dos o más Estados.

8 Posada Carbó, Eduardo. “¿Guerra Civil? El Lenguaje del conflicto en Colombia”. Alfaomega-Ideas para la Paz, Bogotá, 2001, p. XIV.

9 Peace Research Institute Oslo, en www.prio.org

- **Conflicto armado interno:** Ocurre entre el gobierno de un Estado y grupos de oposición interna, sin la intervención de otros Estados.
- **Conflicto armado interno internacionalizado:** Ocurre entre el gobierno de un Estado y grupos de oposición interna con intervención de otros Estados.

La intensidad de un conflicto, medida en el número de víctimas que arroja, también es otro factor que sirve para evaluar las características del mismo. Respecto de esto, el Journal of Peace Research entrega tres parámetros de suma utilidad¹⁰.

Se entiende por **conflicto armado menor** aquel que provoca a lo menos 25 muertos en combate por año y menos de 1.000 muertos en combate durante el curso de todo el conflicto.

Por **conflicto armado intermedio**, aquel que deja al menos 25 muertos en combate al año y un acumulado total de al menos 1.000 muertos en todo el conflicto, pero menos de 1.000 muertos por año.

Y si se presentan al menos 1.000 muertos en combate por año, se podría hablar de una **guerra** propiamente tal.

La forma cómo se libra el conflicto es otro factor que sirve para enmarcar la confrontación. La mayoría de los estudios del tema establecen dos categorías: guerra convencional y guerra no convencional. Harkavy y Neuman sostienen que este tipo de guerra no convencional se define por la manera como luchan los combatientes. Las guerras no convencionales, o guerra de guerrillas, “son libradas por pequeñas unidades que emplean tácticas de golpear y huir, el sigilo, ataques intermitentes y las emboscadas. Hay una inequívoca imaginaria de emboscadas en la selva o rápidas incursiones nocturnas desde el desierto o desde las montañas. No hay grandes divisiones de tanques ni el uso extensivo de artillería pesada ni largas batallas de des-

gaste. Y los mapas y los periódicos al ilustrar estas guerras no indican los movimientos de los frentes de batalla en el día a día...”¹¹.

Otro factor útil para enmarcar la situación se refiere a la duración cronológica del conflicto. La discusión, sin duda, podría llevar al momento mismo en que los conquistadores españoles se empezaron a instalar en los territorios o desde la década de 1990, con el retorno de la democracia, teniendo en cuenta la decisión del gobierno del presidente Patricio Aylwin de crear la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), la promulgación de la Ley 19.253, por la cual el Estado reconoce a los pueblos precolombinos, y los primeros ataques a instalaciones forestales y camiones. Pero eso mismo es objeto de definición.

Al respecto, son considerados conflictos de larga duración, por ejemplo, el colombiano, que prosigue con el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla fundada en 1964; el israelí-palestino, que data de 1948, y el que libran India y Pakistán por Cachemira, que se origina tras el nacimiento de este último país en la partición del Raj que hizo Gran Bretaña en 1947.

Sobre la duración misma de los conflictos, se puede agregar que en aquellos considerados prolongados tiende a producirse un efecto de persistencia, donde la misma rutina de la violencia política termina originando una dinámica propia que los hace autosostenibles en el tiempo. De este modo, es posible afirmar que la incapacidad de la guerrilla para tomarse el poder, es proporcional en el tiempo a la incapacidad de los militares para propinarles una derrota definitiva.

Esta situación anterior genera cierta inercia en los combatientes y en la sociedad entera, como explican Buvinic y Morrison: “Una vez que ocurre, tiende a ocurrir de nuevo. La violencia genera violencia en la medida que la sociedad entera aprende

10 Strand, Havard; Wihelmsen, Lars; y Gleditsch, Nils Petter, “Armed Conflict Dataset Codebook”, Journal Research of Peace, Vol. 39, N°5, 2002, p.4.

11 Harkavy, Robert y Neuman, Stepahnie. “Warfare and the Third World”. Palgrave, New York, 2001, p. 20.

12 Buvinic, Mayra y Morrison, Andrew R. “Living in a More Violent World”. Foreign Policy, N° 118, spring 2000, p. 61.

a resolver sus conflictos mediante el recurso de la agresión”¹².

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se podría afirmar que en la macrozona sur se está ante la presencia de:

- 1) Un conflicto armado interno, muy acotado en el territorio, puesto que los principales hechos de violencia se circunscriben a cuatro comunas (Tirúa, Cañete, Ercilla y Collipulli) y donde las demandas comunes de los grupos radicales son tierras y autonomía.
- 2) De baja intensidad, por el número reducido de víctimas, dado los criterios internacionales; por cierto, no hay una sola base de datos para contabilizar las víctimas del conflicto. De acuerdo con el Mapuche Data Project de la Universidad de Talca, Universidad Diego Portales, Universidad de Chile y el Instituto Milenio, entre 1990 y 2016 se han contabilizado 21 muertos. Una fuente que tiene relación directa con el manejo del conflicto, sostiene que entre 2018 y 2021 hay un total de 22 fallecidos. En 2017 hay un paréntesis por cambio de metodología. Por lo cual, en suma, estaríamos ante 43 víctimas fatales. Probablemente, en este punto faltan mejores indicadores.
- 3) No convencional, en cuanto al empleo generalizado de armas de bajo calibre y escopetas (algo que está cambiando), fuego y motosierras, como principales herramientas, así como el uso de tácticas propias de la guerra insurgente o de guerrillas, evitando la confrontación directa con fuerzas militares.
- 4) Mediano en duración, si aceptamos la década de 1990 como punto de partida, pero con propensión a extenderse.

Sin una definición propia del conflicto por parte del Estado que es desafiado, ni las policías (o militares, en caso de ser requeridos) tendrán la claridad su-

ficiente y respaldo legal para hacer valer el Estado de derecho ni tampoco los miembros del Gobierno a cargo de resolver el tema podrán desarrollar una estrategia exitosa para enfrentar la violencia, ya sea por medio de la fuerza, de la negociación, o de ambas (suelen ir de la mano).

A raíz de las declaraciones de la CAM y la respuesta de algunos miembros del círculo cercano a Boric, ya se están tomando posturas ante lo que sería una eventual negociación, lo que demuestra el desconocimiento natural sobre cómo funcionan los procesos de resolución de conflictos armados, puesto que Chile no ha tenido que vivir, afortunadamente, esa realidad común a otros países de América Latina.

Al respecto, Carlos Peña afirmó en su columna dominical que si se formara una mesa donde el Estado de Chile se sienta de un lado, y la CAM por el otro, frente a frente, bajo condiciones de igualdad, se habría modificado el marco político que es, justamente, lo que la CAM persigue¹³.

“Debo entender, entonces, que el diálogo con la CAM se explica porque siendo uno más de los distintos centros de poder del pueblo mapuche, tiene una característica singular, que es su reivindicación de la violencia como método de lucha, y por ello se hace necesario neutralizarla mediante una completa política de reparación que, aceptada por ella, permitiría terminar con la violencia sin necesidad de, como última *ratio*, recurrir a la acción de la fuerza del Estado”, sostuvo el senador Francisco Huenchumilla en otra columna¹⁴.

Ambas opiniones coinciden en adelantarse a la fase de prenegociación¹⁵, donde la primera pregunta es, justamente, “¿Cuál es el problema?”, es decir, la definición de la naturaleza del conflicto. Luego, vendrán otras interrogantes no menores: “¿Qué se quiere?”, objetivos; “¿Con qué orden?”, prioridades; “¿Con quién hablar?”, interlocutores; “¿Tipo

13 El Mercurio, “¿Dialogar con la CAM?”, Carlos Peña, 2 de enero de 2022, p. D11.

14 El Mercurio, “A propósito del diálogo con la CAM”, Francisco Huenchumilla, 4 de enero de 2022, p. A2.

15 Fisas, Vicenc. “Procesos de paz y negociación de conflictos armados”. Paidós, Barcelona, 2004, p. 60.

de negociación?”, entre cúpulas o diálogo amplio con todos los sectores involucrados; “¿Cuándo (momento) y cómo hacerlo (estrategia)?”; “¿Con qué visibilidad?”, publicidad o secreto, etc.

Probablemente, no haya expresión más vacía que aquella que dice que “no se negocia con terroristas”. Si esto fuese cierto, no se habrían logrado acuerdos de paz con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1998 o con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Ambas organizaciones cometieron acciones terroristas y que incluso se encargaron de reivindicar.

Las guerrillas rurales o urbanas siempre buscarán que se reconozca su “legitimidad política”, es decir, que se les asuma como organizaciones representativas de demandas que poseen algún grado de validez y que les permite arrogarse el derecho moral de gobernar un país o un territorio. El solo hecho de sentarse a conversar con ellas presupone esto. La clave está en saber en qué posición de fuerza se produce este diálogo, desde un empate técnico frente al Estado —como el proceso de paz que culminó en El Salvador en 1992— o desde una situación de debilitamiento estructural, que les indica a los rebeldes que es mejor negociar antes que desaparecer o ser destruidos.



Familiares de comuneros mapuches heridos en enfrentamientos con militares, protestan frente al hospital donde estaban internados, en la ciudad de Temuco, Región de la Araucanía, Chile, zona bajo estado de emergencia. 4 de noviembre de 2021.

Fuente: France Presse

0.3

Tour de force

Las democracias suelen ser malas para defenderse, incluso cuando son atacadas por fuerzas ilegales e ilegítimas, porque además de velar por la integridad de las personas, propiedades e instituciones, en ellas se defiende el principio de que la vida política debe estar libre de violencia. Esto, porque en el fondo tratan de no terminar siendo iguales a quienes combaten. A esa conclusión llegó Ignatieff¹⁶ cuando se preguntó sobre cómo dar una respuesta legal y ética al terrorismo, tras la represalia que siguió a los atentados de Al Qaeda, en 2001, en Nueva York y Washington.

Mientras no existan aún perspectivas de diálogo, el futuro gobierno de Boric se verá ante la obligación inmediata de adoptar decisiones que permitan defender a la población civil, funcionarios del Estado y bienes públicos y privados atacados por los grupos radicales. La provisión de seguridad es parte de la función básica del Estado, algo sobre lo cual se ha fallado sistemáticamente en la macrozona sur. Él mismo fue claro al precisar que va “a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz”. La pregunta es qué hará con aquellos que no quieran transitar ese camino.

Los clásicos de la contrainsurgencia, como el capitán francés David Galula, enseñan que el centro de gravedad de todo conflicto irregular está en la población¹⁷ y, por lo mismo, ahí debiera estar su foco: proteger al sector pacífico que se intuye mayoritario, al cual el Estado debe cuidar con todos sus medios, proveerle condiciones de desarrollo y evitar así que sea coaccionado o cooptado por una

minoría radical. “Una guerrilla sin apoyo popular es un pez fuera del agua”, advertía el mismo Mao Zedong¹⁸.

Es difícil medir el apoyo o rechazo real que despiertan los grupos radicales en la macrozona sur, pero con todos los reparos, la última elección presidencial puede dar luces al respecto. Como observó El Mercurio en un editorial¹⁹, en 12 de las 16 comunas del país donde la población mapuche supera el 50%, el último resultado electoral favoreció al candidato de derecha José Antonio Kast, quien prometía reforzar la autoridad del Estado. Mientras, en comunas con las tasas de población mapuche superiores al 35% e inferiores al 50%, las cifras no fueron muy distintas.

En la consulta ciudadana no vinculante sobre la extensión del estado de emergencia en la Región de La Araucanía, impulsada por gobernador Luciano Rivas y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía, de los casi 145.000 participantes del proceso, algo más de 118.000 respaldaron la medida, y 26.655 personas la rechazaron.

Aquí vale la pena detenerse un momento para revisar la relación entre las demandas de tipo étnico y la justificación de la violencia. Las demandas del pueblo mapuche respecto a la responsabilidad del Estado de Chile no pueden ser desconocidas y deben ser atendidas adecuadamente. Algo que la sociedad en su conjunto acepta cada vez más. Sin embargo, en lo que respecta a los grupos radicales, estudios internacionales sobre violencia

16 Ignatieff, Michael. (2005). “El mal menor: Ética política en la era del terror”. Taurus, Bogotá.

17 Galula, David. (1965). “Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice”. Frederik A. Praeger, New York, p. 8.

18 Mao Tse-Tung. “An Anthology of his Writings”, edited by Anne Fremantle, Mentor Book, New York, 1962, p. 152.

19 El Mercurio, “El próximo gobierno y la CAM”, editorial, 2 de enero de 2022, p. A3.

intraestatal indican que, a diferencia de lo que se podría pensar, las reivindicaciones étnicas más que ser una causa movilizadora principal, actúan como catalizadores de conflictos preexistentes, lo que es aprovechado por líderes locales, tal como afirma John Mueller. En estos conflictos no vemos a todo o la mayor parte de un grupo movilizado violentamente, si no a pequeños grupos armados organizados que utilizan las reivindicaciones étnicas para buscar sus propios intereses. En cierta forma, lo étnico viene a ser una característica de algunos perpetradores y líderes que lo emplean para justificar la lucha²⁰.

La literatura especializada sugiere en los conflictos internos rotulados como étnicos que, lo que permite el ejercicio de la violencia no es la reivindicación o demandas de ciertos grupos minoritarios, si no ciertas condiciones materiales y la existencia de actores que aprovechan las circunstancias. Paul Collier, Anke Hoeffler y Dominic Rohner, plantean que cuando una “rebelión” (insurgencia o guerrillas) es materialmente posible, probablemente ocurrirá. Dentro de las principales variables a considerar, estos académicos identificaron el nivel de ingresos (PIB y nivel de pobreza), crecimiento económico (variación del PIB, empleo y oportunidades), dependencia de recursos naturales exportables (desde donde los insurgentes pueden obtener financiamiento), características de la población (número y proporción de hombres jóvenes) y de manera menos relevante, las características de la geografía (especialmente terrenos montañosos)²¹.

Dicho esto, si el presidente electo decide emplear la fuerza para enfrentar a las organizaciones ilegales que han manifestado su decisión de seguir combatiendo, tendrá que elegir entre muchos cursos de acción posibles. Desde el punto de vista de la contra-insurgencia, existe una larga lista de buenas y malas experiencias.

Sin embargo, las vulnerabilidades que presentan los grupos insurgentes²² suelen repetirse sin importar el lugar del conflicto. Y estas pueden ser explotadas por quienes tienen la tarea de hacerles frente.

- 1) La necesidad de mantener el secreto.
- 2) Las inconsistencias en el mensaje movilizador.
- 3) La necesidad de establecer bases de operaciones.
- 4) La dependencia del apoyo externo.
- 5) La necesidad de obtener recursos financieros.
- 6) Las divisiones internas.
- 7) La necesidad de mantener el *momentum*.
- 8) Informantes dentro de la insurgencia (inteligencia).

Dada la fragmentación que se observa en la macrozona sur, donde cuatro grupos son sindicados como los responsables de los hechos más violentos, y ante la ausencia de cabecillas visibles, más que intentar descabezar a las organizaciones insurgentes —táctica que se aplicó con éxito contra las FARC y Sendero Luminoso—, parecería más adecuado concentrarse en desarticular las redes sobre las cuales operan estas organizaciones, lo que supone cortar los ramales o arcos por donde transitan armas, dinero y comunicaciones entre los distintos nodos que la componen. Esto solo es posible si el liderazgo a cargo de esta tarea entiende la “conciencia compartida” que mueve a la organización insurgente, aplica una “ejecución empoderada” de los recursos disponibles y sienta una nueva narrativa para describir el conflicto. Y, por último, si acelera sus ritmos de retroalimentación y respuesta. Esta es la forma como actúa la contra-insurgencia actual.

20 Mueller, John. “The Banality of Ethnic War”, *International Security Vol 25*. The MIT Press (2000): 42-70.

21 Paul Collier, Anke Hoeffler, and Dominic Rohner, “Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil War,” *Oxford Economic Papers 61* (2009): 1-27.

22 U.S Army & Marine Corps (2007). “Counterinsurgency Field Manual”. Chicago University Press, Chicago, p. 31-34.

Desde la perspectiva de la guerra de guerrillas, la inteligencia siempre será primordial, incluso por sobre las operaciones, puesto que se trata de entornos complejos y marcados por la ambigüedad al darse en medio de la población²³. El problema es que Chile no tiene un sistema de inteligencia del Estado moderno²⁴ y su actualización se ha topado con el bloqueo sistemático del Congreso. La inteligencia es lo que permite identificar también la ruta del dinero que financia a los rebeldes (robo de madera, extorsiones y abigeato) y determinar quiénes deben ser capturados por las policías de acuerdo con los procedimientos legales vigentes y con respeto a los derechos humanos.

Una adecuada inteligencia conduce a un proceso de toma de decisiones eficaz y efectivo, permitiendo orientar los siempre escasos recursos existentes. De igual manera, orienta las acciones de la fuerza pública sobre los infractores de la ley, sin lesionar la relación con las poblaciones locales y haciendo énfasis en la protección de las personas inocentes. Solo así se puede avanzar en una solución estructural de los conflictos.

23 Kilcullen, David (2010), "Intelligence", en Rid, T, and Keany T. (2010), "Understanding counterinsurgency". Routledge, New York, p. 144.

24 AthenaLab (Agosto 2019), "Propuesta para un nuevo sistema de inteligencia nacional", en <https://athenalab.org/propuesta-para-un-nuevo-sistema-de-inteligencia-nacional-2/>.



Camioneros bloquean la Ruta 68 para protestar por el aumento de ataques que están sufriendo, especialmente en la región de la Araucanía, donde se ha recrudecido un histórico conflicto territorial entre el pueblo indígena mapuche y el Estado. Lo Vásquez, Valparaíso, Chile, 1 de septiembre de 2020.

Fuente: France Presse

0.4

Conclusión

Sin duda, el nuevo gobierno tiene el derecho a buscar todas las instancias posibles para generar soluciones que devuelvan la paz a la macrozona sur. Si quiere apostar por el diálogo, ayudaría mucho que el presidente electo Gabriel Boric fije las condiciones previas en la etapa de la prenegociación, como establecer el prerequisite del cese de hostilidades para conversar. Ahora, es cierto que en el pasado estos grupos no han dado tregua a los nuevos gobiernos ni tampoco han empatizado con quienes podrían tener causas comunes, por lo cual, el nuevo mandatario también tiene que considerar la posibilidad de que los acercamientos no prosperen o fracasen. Además, la última Encuesta Bicentenario constata que ha disminuido la justificación a la violencia cuando se trata de minorías indígenas que reclaman tierras, desde 20% en 2012 a 13% en 2021²⁵.

Si hay que emplear la fuerza, las experiencias disponibles muestran que su uso para un conflicto de las dimensiones actuales debe ser quirúrgico cuando el Estado es desafiado, y siempre excepcional. Los efectivos desplegados en el terreno tienen que contar con la facultad de defenderse sin son atacados (un derecho básico), sobre la base de reglas de enfrentamiento claras y previamente definidas. Pero no se puede descartar el uso robusto de la fuerza si la agresión es mayor. Hasta ahora, los ataques se concentran mayormente en instalaciones madereras, residencias privadas y vehículos detenidos o en movimiento; nada parecido al campamento de un cuartel policial. Por eso, se está a tiempo de frenar una escalada, que por lo demás,

ya tiene un techo: la dificultad de expandir el teatro de operaciones a zonas sin presencia mapuche.

“El primer riesgo para un gobierno es no tener claros los objetivos de corto y largo plazo, no definir previamente la visión de una situación de ‘fin de juego’, no proveerse de la ayuda externa consistente y apropiada, y no conseguir dentro de sí la unidad de propósitos. Si todo esto ocurre, la opinión no sabrá qué hace su gobierno ni por qué lo hace”, advierte Rangel²⁶.

Lo importante, por lo tanto, será desarrollar líneas de acción en los ámbitos gubernamental, jurídico, económico, comunicacional y de seguridad, siempre en busca de una solución integral y permanente, que podría considerar al menos cinco puntos posibles:

- 1) Reconocimiento a los pueblos originarios (probablemente, esto se consagre en el nuevo proyecto de Constitución).
- 2) Restitución de la confianza de los pueblos de la zona en el Estado.
- 3) Macrozona sur en paz y libre de la violencia de grupos armados organizados.
- 4) Actividades económicas sustentables, es decir, que generen empleos necesarios, que sean amigables con el medio ambiente y respeten las tradiciones.
- 5) Lograr que se perciba acción permanente de un gobierno central legítimo.

25 Pontificia Universidad Católica de Chile, “La Encuesta Bicentenario UC 2021”, p. 52. En https://politicaspUBLICAS.uc.cl/wp-content/uploads/2022/01/Encuesta-Bicentenario-2021-versio%CC%81n-final_OK-1.pdf.

26 Rangel, Alfredo. “Guerra insurgente”. Intermedio, Bogotá, 2001, p. 47.

Cuenta una anécdota que durante una visita a la capital de México, el Subcomandante Marcos, líder de la guerrilla indigenista Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)²⁷, fue interpelado en un sindicato sobre qué pasaría si un líder de izquierda, como entonces era Cuauhtémoc Cárdenas, ganara la elección presidencial de 2006, a lo cual respondió: “Pues a nosotros no nos conviene”²⁸.

Por eso, el futuro gobierno de Gabriel Boric tiene una oportunidad única para desacreditar a los grupos que reivindican la lucha armada, y para ello requiere construir una definición aceptada del conflicto, aislar a los grupos que validan públicamente la violencia como instrumento político (dentro de su coalición también debe exigirlo), eventualmente adelantar un diálogo en sus términos, y hacer uso de las facultades que le da la ley para cumplir con el deber de proveer seguridad a la ciudadanía y Estado de derecho. Lo que no tiene es tiempo. Lo que no tiene es tiempo, ya que el conflicto podría convertirse en uno de los mayores problemas de su administración. Un aumento de la violencia de los insurgentes para llegar en un mejor pie de fuerza a una eventual negociación es típico de estos momentos.



Fuente: Twitter

27 Ramonet, Ignacio. (2001). “Marcos, la dignidad rebelde: Conversaciones con Ignacio Ramonet”. Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago, p. 50.

28 Villeda, Alfredo. “De la novela indigenista a ‘Marcos’”, en <https://fusilerias.com/novela-indigenista-a-marcos-ezln-ejercito-zapatista/>

0.5

Autor

JUAN PABLO TORO

Director Ejecutivo de AthenaLab.

Magíster en Ciencia Política y periodista de la Universidad Católica de Chile. Diplomado en Seguridad Nacional del Instituto Tecnológico Autónomo de México y egresado del curso Estrategia y Política de Defensa del Center for Hemispheric Defense Studies. Cubrió en terreno el conflicto armado en Colombia entre 2000 y 2005 como corresponsal para The Associated Press.



Patrullas militares controlan el acceso a las comunidades mapuches del sector de Ercilla en la denominada "Zona Roja" de la Araucanía, donde se declaró Estado de Excepción ante el avance de los incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas de bosques y cultivos agrícolas. Ercilla, Chile, 23 de febrero de 2019.

Fuente: France Presse

Av. El Bosque Norte 0177, oficina 1101, Las Condes, Santiago, Chile

(56 2) 2 25947457 | contacto@athenlab.org

www.athenlab.org

